

EL CONCORDATO DE 2004 ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA

Concepción Presas Barrosa
Universidad de Santiago de Compostela

Sumario: 1. *Antecedentes*.- 2. *Razones para un nuevo Concordato*.- 3 *Los contenidos del Concordato de 2004*.- A) Su formulación y punto de partida.- B) El principio de cooperación entre la Santa Sede y la República Portuguesa.- C) El clero y la organización eclesiástica.- D) El matrimonio canónico.- E) La asistencia religiosa católica.- F) La educación.- G) El patrimonio cultural de la Iglesia católica.- H) Asuntos económicos.- I) Disposiciones finales.- 4. *Valoraciones sobre el nuevo concordato*.- APÉNDICE: *Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa. 18 de mayo del 2004*.

Antecedentes

Las relaciones entre la Santa Sede y la República Portuguesa inician ahora una nueva fase, si tenemos en cuenta el hecho de que el Concordato firmado en 2004 sustituye al anterior, datado en 1940, que mantuvo su vigencia en su práctica integridad hasta la actualidad.

La transición del Estado portugués hacia posicionamientos democráticos a partir de la Revolución del 25 de abril de 1974 sólo afectó al artículo 24 del entonces vigente marco concordatario, relativo al matrimonio; en un protocolo adicional –firmado en la ciudad del Vaticano el 15 de febrero de 1975– se reconoce que “se mantienen en vigor los otros artículos del Concordato de 7 de mayo de 1940”.

El Concordato de 2004 mantiene una tradición de acuerdos entre la Iglesia católica y Portugal; cabe entender como concordatos históricos los anteriores al siglo XVIII, los cuales “se asemejan más bien a concesiones o privilegios que la Iglesia otorga a determinados príncipes o países”¹.

De las tantas veces denominadas “concordias” se pueden citar, entre las vinculadas a los reyes portugueses de la Casa de Borgoña, las acordadas entre Sancho I (1185-1211) y los Prelados (1210); entre Alfonso II (1185-1223) y

¹ GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., “Los Concordatos o Acuerdos entre la Iglesia Católica y los Estados”, en CORRAL SALVADOR, C., GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J. (dir.), *Concordatos vigentes*, Madrid, 1981, I, p. 19.

los Prelados; entre Sancho II (1223-1248) y el arzobispo de Braga –una en 1223 y otra en 1238–; la de don Dinis (1279-1325), en 1289; y la de Pedro I (1357-1367), en 1361.

Con la Casa de Avis se relaciona, entre otras, la concordia firmada por Manuel I (1495-1521) en 1516. Y con la Casa de Braganza, en tiempos de João IV (1640-1662), se rubrica una nueva en 1642.

Será a partir del siglo XVIII cuando se hable propiamente de concordatos. Sigue en estos momentos la Casa de Braganza otorgando reyes a Portugal. Don João V (1706-1750) firma uno en 1737; cinco años más tarde se data otro, suscrito por Pío VI y la reina María I (1777-1819); en 1848, el acordado entre Pío IX y la reina María II (1826-1828 y 1834-1853) se entiende como una convención, continuando de este modo con la denominación dada al documento firmado en 1801 entre la Santa Sede y el Gobierno francés, conocido como “concordato napoleónico”²; Pío IX y el rey Pedro V (1853-1861) firman en 1857 un tratado; y el de 1886 –en tiempos de León XIII y el Rey Luis I (1861-1889)– utiliza la denominación de convenio.

El Concordato de 1940 se acuerda tras una fase –entre 1910 y 1926– en la que, proclamada la República en 1910, el catolicismo vivió en Portugal una intensa persecución y una fuerte oposición; la Ley de Separación del Estado de las Iglesias, del 20 de abril de 1911, sería “la máxima expresión de los ataques a la Iglesia Católica y a sus instituciones”³. Habrá que esperar a 1926 para que se abra en Portugal una nueva etapa en la que, derrocado el parlamentarismo republicano, éste inicie una nueva etapa, favorable a los intereses de la Iglesia católica que, tras tres años de negociaciones, se firma en Roma el 7 de mayo, en una fecha simbólica en la que se conmemora “el 8º centenario de la fundación y 3º de la restauración de la independencia de Portugal”⁴.

El contexto histórico en el que se acuerda este nuevo concordato es el de un Portugal que en 1933 había promulgado la constitución del Estado Nuevo, con un régimen corporativo y dictatorial, en aquellos momentos en que la II Guerra Mundial asola media Europa, y ante la que el país luso –al igual que España– adopta una posición de neutralidad.

Se firma el Concordato de 1940 durante el papado de Pío XII, siendo presidente del país Antonio de Oliveira Salazar –figura muy vinculada a lo que

² CORRAL SALVADOR, C., “Introducción histórica y panorama actual de los Concordatos vigentes”, en CORRAL SALVADOR, C., GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J. (dir.), *Concordatos...*, *op. cit.*, p. 45.

³ VAZ DE CARBALLO, J., “La Iglesia en Portugal desde 1910 a 1980”, en ALDEA, Q., CÁRDENAS, E., *Manual de Historia de la Iglesia. La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y América Latina*, t.X, Barcelona, 1987, p. 382.

⁴ VAZ DE CARBALLO, J., “La Iglesia en Portugal...”, *op. cit.*, p. 388.

se ha entendido como “resurgimiento religioso de Portugal”⁵-. En este tratado se integran también dos acuerdos, firmados el 15 de abril de 1928 y el 11 de abril de 1929⁶.

Se ha entendido el Concordato de 1940 como una proclamación de la libertad religiosa en un Estado que ya no es confesional⁷, en el que se señala la separación entre ambos poderes y “que no grava absolutamente nada el presupuesto nacional, al no establecer ninguna dotación para el culto y clero, al menos para la metrópoli”⁸. Sin embargo, cuando se considera que este concordato valora la libertad religiosa, lo hace entendiéndola, exclusivamente, como el marco en el que la Iglesia católica actúa en el territorio portugués⁹.

Pertenece este Concordato de 1940 a los que se entienden, en razón de su contenido, como “completos”, dado que no trata sobre un asunto concreto, sino que pretende desarrollar la práctica generalidad de las cuestiones que son objeto de relación entre la Iglesia católica y el Estado portugués. La “Convención entre Su Santidad Pio VII y el gobierno francés”, de 15 de julio de 1801¹⁰, puede reconocerse como una referencia ejemplar de este tipo de acuerdo.

Razones para un nuevo Concordato

La justificación fundamental de que los contenidos del Concordato de 1940 –salvo lo ya señalado referido al matrimonio– estuviesen vigentes hasta

⁵ *Idem*, p. 391.

⁶ Por el acuerdo de 1928 se regula la circunscripción de las diócesis, el nombramiento de los obispos y la doble jurisdicción tratada ya en el Concordato de 1886. Por lo acordado en 1929 se fijan los límites y la jurisdicción de determinadas diócesis en las Indias Orientales. Cfr. FERNÁNDEZ ARRUTY, J.A., “Portugal”, en CORRAL SALVADOR, C., GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J. (dir.), *Concordatos vigentes*, Madrid, 1981, p. 320.

⁷ Sin embargo Portugal es un Estado en el que se reconocen nueve de cada diez ciudadanos como católicos. Tanto es así que, al decirse en el preámbulo que este Concordato es el necesario en un país democrático, hay quien califica a esta democracia como “portuguesa”, teniendo en cuenta, precisamente, esa inmensa mayoría católica. En MENDOÇA CORREIA, “A quen ler atentamente a Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, assinada aos 18 dias do mês de maio de 2004, serão tal vez dalgun proveito as seguintes reflexões...”, disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Mendoza_Correia.htm.

⁸ FERNÁNDEZ ARRUTY, J.A., “Portugal...”, *op. cit.*

⁹ Sobre este Concordato véanse *Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa. Acordo Missionário*, Lisboa; *Rei dos Livros*, 1991; *A Concordata de 1940: Portugal- Santa Sé*, Lisboa, Ed. Didaskalia, 1993, en donde se recogen las actas de las jornadas de 25 al 27 de febrero de 1991, organizadas por el Centro de Estudios de Derecho Canónico; *Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa*, Lisboa, Livraría Almedina, 2001, que recoge la edición que el Centro de Estudios de Derecho Canónico realizó ofreciendo su texto integro así como diferentes estudios, comentarios y anotaciones.

¹⁰ CORRAL SALVADOR, C., “Introducción histórica...”, *op. cit.*, p. 45.

2004 puede encontrarse en la bondad, en líneas generales, de los criterios en que se sustentaba. Sin embargo, también ha de tenerse en cuenta que una buena parte de su articulado, con el paso del tiempo, había perdido actualidad y se precisaba, por ello, una revisión de lo pactado.

La conveniencia de un nuevo Concordato se basa ahora en una serie de razones que tienen que ver, en unos casos, con la evolución de la propia mentalidad y doctrina de la Iglesia católica y, también, con los cambios que Portugal ha vivido en estos años, en los que no es un asunto menor el proceso descolonizador acaecido tras la llamada Revolución de los Claveles, que dejó sin sentido la parte relativa al Acuerdo Misional anejo al Concordato de 1940.

Se han valorado como factores que animaron a los cambios en la orientación de sus contenidos las “transformaciones a nivel social, cultural, político, económico que marcaran mucho la sociedad portuguesa; la celebración del Concilio Vaticano II¹¹; las alteraciones políticas provenientes de la Revolución del 25 de abril de 1974, particularmente la transición para un régimen democrático; la adhesión a la Unión Europea, de la cual Portugal es miembro de pleno derecho; la promulgación de la nueva Ley de Libertad Religiosa, en 26 de abril del 2001, que vino a poner en realce el principio constitucional de igualdad de derechos entre todas las confesiones religiosas y de la libertad religiosa para todos los ciudadanos”¹².

La promulgación, en 1983, de un nuevo Código de Derecho Canónico ha de ser también tenida en cuenta a la hora de orientar el texto concordatario que se debía acordar entre la Iglesia católica y la República Portuguesa.

También, como ha remarcado el propio cardenal-patriarca don José Policarpo, presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en estos últimos años, en el ámbito de la propia Iglesia católica “se desarrolló una mayor abertura al diálogo interreligioso, intercultural, como a la propia laicidad”¹³; la concreción de un Concordato no sería ajena a este momento de la Iglesia católica.

Un precedente –que ocupa de un modo muy especial al papa Juan Pablo II¹⁴– es el que tiene que ver con el Concordato acordado entre la Santa Sede y

¹¹ Existe, sin embargo, un movimiento en contra de la existencia de los Concordatos derivado del concepto de Iglesia como Comunión, vinculado al Concilio Vaticano II. Véanse GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., “Los Concordatos...”, *op. cit.*, p. 38-39; LEITE, A., “Natureza e oportunidade das Concordatas”, en LEITE, A. et al., *A Concordata de 1940. Portugal-Santa Sé*, Lisboa, Ed. Didaskalia, 1993, p. 4, disponible en: <http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Naturez.htm>.

¹² SATURINO GOMES, M., *A nova Concordata*, disponible en: http://www.ucp.pt/cedc/Noticias/Comen_Concordata2004.html.

¹³ *Cardeal-Patriarca e a nova Concordata*, en una entrevista concedida a la Agência Ecclesia, disponible en: http://www.ucp.pt/cedc/Materiais/nao_ve_priv.html, pág. 1.

¹⁴ Véase CORRAL SALVADOR, C., *Los Concordatos en el Pontificado de Juan Pablo II. Universalismo y Coordinadas*, Lisboa, Centro de Estudos de Direito Canónico, col. *Cadernos Forum Canonium*, 4, 2004.

la República de Polonia, del que es objeto un discurso papal, del 25 de marzo de 1998, en el que, a la hora de explicar el sentido de este Concordato, señala que la “razón fundamental de la colaboración de la Iglesia y del Estado es el bien de la persona humana. Esa cooperación debe tutelar y garantizar los derechos del hombre”¹⁵.

Por lo que se refiere a la República Portuguesa, ha de dársele, para definir este nuevo Concordato, su marco jurídico constitucional —en vigor desde el 25 de abril de 1976 y que contiene reformas aprobadas el 12 de diciembre de 2001—, que, como se reconoce por parte de la propia Iglesia católica en Portugal, “exige una apertura en términos de civilización a la libertad religiosa, a la igualdad de todos los ciudadanos, a una afirmación positiva de la laicidad y de la separación del Estado en materia religiosa”¹⁶.

El proceso de elaboración de este nuevo Concordato fue una tarea que se acometió a lo largo de cuatro años, según reconoció el profesor Antonio Sousa Franco, uno de los expertos que negoció el nuevo texto¹⁷ por parte de la Santa Sede.

Se partió, por ambas partes, de la idea de revisar los contenidos del texto de 1940 actualizándolos, pero, tras las primeras reuniones, se contempló ya la conveniencia de redactar uno nuevo. Se tuvieron en cuenta, en la correspondiente negociación, los valores que encierran principios como el de cooperación y libertad religiosa; de este modo, ámbitos como el del patrimonio cultural se iban a considerar desde ese prisma de la cooperación y, desde esa idea, se iba a crear una comisión mixta permanente.

También, y como desarrollo del principio de libertad religiosa, se considerarían cuestiones como la asistencia religiosa y las personalidades jurídicas eclesiales¹⁸, habida cuenta de que en este Concordato se abordan temas como el de “la conciencia, culto, reunión, asociación, expresión pública, enseñanza y actividad caritativa”. Resultó sin embargo más compleja, en la negociación acometida, la búsqueda de acuerdos en cuestiones como la educación religiosa.

¹⁵ *Discurso del papa Juan Pablo II con ocasión de la ratificación del Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia (25 de marzo de 1998)*, disponible en: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1998/march/documents/.

¹⁶ *Agência Ecclesia: Cardeal-Patriarca não vê privilégios para a Igreja Católica na nova Concordata*, disponible en: http://www.ucp.pt/cedc/Materiais/nao_ve_priv.html.

¹⁷ *AGENCIA Ecclesia: A democracia portuguesa só tem a ganhar com a existencia de paz religiosa, diz Sousa Franco*, disponible en: http://www.ucp.pt/cedc/Materiais/nao_ve_priv.html.

¹⁸ La libertad religiosa, con este Concordato, sale “reforzada y engrandecida”; en este caso no se entiende sólo como libertad de conciencia, sino también como libertad institucional de la Iglesia, según aprecia BRAGA DA CRUZ, M., *A Concordata e as relações Igreja-Estado*, disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Manuel_Cruz.htm p. 1

El mismo Sousa Franco reconoce que con la firma de este nuevo tratado se pretendía “disminuir los conflictos y crear armonía en la colaboración, de modo que cada uno (Iglesia y Estado) haga lo que le es propio”¹⁹.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que previamente, por la “Resolução nº 39/2000, de 6 de Abril”, la Asamblea de la República había decidido “pronunciarse a favor de la adaptación por el Estado Portugués de las medidas necesarias y adecuadas a la apertura y realización [...] de un proceso de revisión”²⁰. También hay que valorar que existe una Resolución del Consejo de Ministros –nº. 67/2001, del 17 de mayo–, por la que se crea “en dependencia del Ministro de Asuntos Exteriores, una comisión que tiene por objeto la negociación de la revisión del Concordato vigente”²¹; es importante el hecho de que, desde un primer momento, lo que se pretende por parte del Estado portugués es una “revisión” de un Concordato, lo que supone, en principio, partir de la idea de mantener para el mismo una estructura similar a la existente en el texto concordatario anterior.

Que la Asamblea de la República se disolviese en el año 2001 y que, tras el debido proceso electoral, cambiase el Gobierno supone un nuevo contexto político que, en este caso, no va paralizar un proceso que si bien en aquel momento apenas se había puesto en marcha, lo cierto es que su desarrollo resultaba conveniente para ambas partes.

El nuevo Concordato se firmó el 18 de mayo de 2004. Lo hace, por parte de la Santa Sede, el secretario de estado, Angelo Cardinale Sodano, y por la República Portuguesa, el primer ministro, José Manuel Durão Barroso.

Tras la firma del Concordato en el Vaticano, fue ratificado por la Asamblea de la República, por una amplia mayoría –recibió el voto favorable de todas las fuerzas políticas con la excepción del Bloque de Izquierda²²– y fue posteriormente firmado por el presidente de la República para su promulgación²³, entrando en vigor el 18 de diciembre del 2004²⁴, lo que lo convierte en una ley interna “tanto para el Estado como para la Iglesia” que “obliga a ambas partes”²⁵.

¹⁹ *Agência Ecclesia: A democracia portuguesa...*, *op. cit.*, p. 1-2

²⁰ Lo subraya MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 1.

²¹ *Ibidem*.

²² *Agência Ecclesia: Parlamento aprova voto de congratulação pela assinatura da Concordata*, disponible en: http://www.ucp.pt/cedc/Materiais/voto_congrat.html.

²³ Así se lo indica el cardenal-patriarca, don José Policarpo, en su Discurso de Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en la apertura de los trabajos de su 157ª Asamblea Plenaria, *Agência Ecclesia*, 8/11/2004.

²⁴ “Concordata entra em vigor a 18 de dezembro”, *Agência Ecclesia* (25/11/2004).

²⁵ LEITE, A., “Natureza e oportunidade...”, *op. cit.*, p. 2.

Ha de entenderse, en todo caso, la ratificación de este nuevo Concordato como un “reconocimiento de la especificidad organizativa de la Iglesia Católica y no de la concesión de un privilegio. Téngase en cuenta que el tratado tiene un valor jurídico superior a la ley, pero tiene el mismo espíritu y ambos obedecen a la Constitución”²⁶.

Los concordatos se entienden como pactos bilaterales entre un Estado y la Santa Sede, valorados como “poderes jurídicamente iguales”²⁷ que no pueden ser derogados unilateralmente²⁸ y con los que se pretende generar unas relaciones estables y duraderas entre las dos partes pactantes²⁹.

Los contenidos del Concordato de 2004

Su formulación y punto de partida

La negociación de un Concordato³⁰, como nuevo marco de relaciones Iglesia católica-República Portuguesa, se hace, como es lógico, a partir de lo dispuesto en el anterior. Si el de 1940 constaba de 31 artículos –con un Acuerdo Misional anejo con 21–, el de 2004 contiene³¹ 33.

Ambos concordatos presentan antes de su articulado una serie de consideraciones introductorias, a modo de preámbulo, que dan cuenta de dos momentos de naturaleza diferenciada.

Aunque el Concordato de 1940 se realiza desde el criterio de la aconfesionalidad, su texto se inicia así: “En nombre de la Santísima Trinidad, Su

²⁶ Así lo expresa ADRAGÃO, P., “Para aquém e para além da Concordata”, *Jornal de Notícias* (19/6/04); disponible en: <http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/PauloAdragao.htm>.

Aun cuando se afirme, por otra parte, que “la norma concordada [...] tiene un rango superior al de la cualquier norma de derecho interno, incluso constitucional” –así se dice en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., “Los Concordatos...”, *op. cit.*, p. 22; debe tenerse en cuenta que la aprobación de un concordato exige, en la actualidad, la ratificación, lo cual supone una aceptación, en el caso portugués, primero de la Asamblea y, después, del presidente de la República, algo que implica que lo dicho en el concordato, ya negociado y firmado, se adecua en sus contenidos al marco constitucional.

²⁷ SATURINO GOMES, P., “O que é uma Concordata?”, *Agencia Ecclesia*, 11/5/2004; disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/O_q_e_concordata.htm.

²⁸ GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., “Los Concordatos...”, *op. cit.*, p.22.

²⁹ *Idem*, p. 30

³⁰ Véase al respecto VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.M. (ed.), “Los Concordatos: pasado y futuro”, en *Actas del Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Almería, 12-14 de noviembre de 2003, Ed. Comares, Granada, 2004.

³¹ En el nº 3 de la colección *Cadernos Forum Canonicum*, pueden consultarse los textos de los Concordatos de 1940 y de 2004, el Acuerdo Misionario, la Ley de Libertad Religiosa (2001), el Decreto-Ley de Registro de Personas Colectivas Religiosas (2003), el Decreto-Lei sobre o funcionamento da Comissão da Liberdade Religiosa (2003), y una tabla de correspondencia de los artículos de dos Concordatos.

Santidad el Sumo Pontífice Pío XII, y Su Excelencia el Presidente da República Portuguesa...”³². En tanto que el texto de 2004 comienza afirmando la autonomía e independencia de la Iglesia católica y del Estado.

Por otro lado, si el objetivo de 1940 no era otro que “regular de acuerdo mutuo y de modo estable la situación jurídica de la Iglesia Católica en Portugal para la paz y el mayor bien de la Iglesia y del Estado”, en el texto de 2004 se alude a las profundas relaciones históricas entre ambas partes, las responsabilidades que los vinculan “en el ámbito de la libertad religiosa, al servicio a favor del bien común y al empeño en la construcción de la Iglesia Católica en Portugal en beneficio de sus fieles y de la comunidad portuguesa en general”.

El Concordato de 2004 también se justifica teniendo en cuenta tanto los cambios sucedidos en el Estado como en la Iglesia católica.

En lo referente al Estado se cita el “ordenamiento jurídico portugués, la nueva Constitución democrática, abierta a las normas de derecho comunitario, y del derecho internacional contemporáneo”, que disponen un contexto diferente para la República Portuguesa.

Respecto a la posición actual de la Iglesia se valora ahora “la evolución de sus relaciones con la comunidad política”.

El principio de cooperación entre la Santa Sede y la República Portuguesa

Ya en el artículo 1º ambas partes declaran el empeño “en la cooperación para la promoción de la dignidad de la persona humana, de la justicia y de la paz”³³, algo que está presente en un buen número de tratados internacionales, en el espíritu del Concilio Vaticano II y de la doctrina social de la Iglesia católica³⁴, así como en la palabra del papa Juan Pablo II, concretamente en su discurso con motivo a la ratificación del Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia, cuando señala que “la Iglesia proclamó siempre y proclama que el hombre es el valor más importante sobre la tierra”. El Concordato define de modo jurídico este particular papel de la Iglesia³⁵.

Si esa presencia del principio de cooperación³⁶ –que no resulta extraño a la hora de concretar acuerdos entre la Santa Sede y diferentes Estados y que

³² “Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal (1940)”, en CORRAL SALVADOR, C., GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J. (dir.), *Concordatos...*, *op. cit.*, II, p. 325.

³³ Se ha puesto este nº. 1 del artículo 1 en relación con el artículo 5 de la Ley de Libertad Religiosa, aprobada por la Ley nº. 16/2001, de 22 de junio, en MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 1.

³⁴ SATURINO GOMES, M., *A nova...*, *op. cit.*

³⁵ *Discurso del papa Juan Pablo II.*, *op. cit.*

³⁶ Ya Pío XII, en un discurso pronunciado el 6/12/1953, afirmaba que “Los concordatos son para la Iglesia una expresión de colaboración entre la Iglesia y el Estado”, en SATURINO GOMES, M., “O que é uma...”, *op. cit.*, p. 2.

parte del criterio de la aconfesionalidad³⁷— es algo novedoso en la redacción del artículo, en lo demás trata temas ya considerados en 1940; concretamente, el reconocimiento, por parte de la República Portuguesa de la personalidad jurídica de la Iglesia católica y, por otra, vincular las relaciones entre ambas partes a la existencia de un nuncio apostólico en Portugal y de un embajador de este Estado en la Santa Sede. Si en 1940 se aludía a las “relaciones amigables”, en 2004 se habla, únicamente, de “relaciones”, habida cuenta de que puede haber, también, naturales discrepancias a la hora de desarrollarse las relaciones entre ambos poderes.

Partiendo de ese mismo principio de cooperación se redactan los nuevos artículos 4 y 29. En el 4 se considera que dicha cooperación puede abarcar “actividades ejercidas en el ámbito de las organizaciones internacionales en las que la Santa Sede y la República Portuguesa sean partes o, sin perjuicio del respeto por el derecho internacional, otras acciones conjuntas, bilaterales o multilaterales, en particular en el espacio de los Países de lengua oficial portuguesa”. Esa mención a “acciones conjuntas”, relacionables con los territorios de lengua portuguesa, contempla, en cierto modo, la materia propia del Acuerdo Misional anejo al Concordato de 1940.

El artículo 29, en tanto —también desde ese principio de cooperación—, alude a la institución, “en el ámbito del presente Concordato”, de una Comisión paritaria.

Cabe decir, siguiendo la opinión de Braga da Cruz, que “el Concordato consagra, en la separación de esferas, las condiciones de cooperación, para el bien común y para el bien de ambos, entre el Estado y la Iglesia”³⁸.

El artículo 2 del presente Concordato reitera la materia del mismo número del anterior texto concordatario. Trata sobre el reconocimiento de la República Portuguesa a la Iglesia Católica en lo referente al derecho a ejercer “su misión apostólica y garantiza el ejercicio público y libre de sus actividades, concretamente las de culto, magisterio y ministerio, así como la jurisdicción en materia eclesialística”.

El principio de libertad religiosa está particularmente reconocido, también, en este mismo artículo, en su número 4: “A la Iglesia Católica, a sus fieles

³⁷ Estudia este asunto PETSCHEN VERDAGUEZ, S., CORRAL SALVADOR, C., *Lugar de las Iglesias en el ordenamiento jurídico de los países europeos. Especial atención a las causas de su posición*, UNISCI Discusión Papers (octubre de 2004), p. 10-12. Para estos autores la cooperación desde la aconfesionalidad se justifica por las siguientes razones: a) la mejor atención a la persona humana; b) el porcentaje de ciudadanos pertenecientes a una confesión; c) la promoción de los valores; d) la identidad nacional; e) el pragmatismo.

³⁸ BRAGA DA CRUZ, M., *A Concordata e as relações Igreja-Estado*, disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Manuel_Cruz.htm.

y a las personas jurídicas que se constituyan en los términos del derecho canónico [...] particularmente en los dominios de la conciencia, culto, reunión, asociación, expresión pública, enseñanza y acción caritativa”. El reconocimiento, por parte del Estado portugués, de las personas jurídicas, constituidas desde la normativa canónica, figuraba ya en el Concordato de 1940, aun cuando tenga ahora un sentido distinto, “pero con los mismos efectos jurídicos”³⁹.

Ya en el artículo 3, y en relación con la práctica cultural católica, la República Portuguesa reconoce como días festivos los domingos. Además, y en el mismo sentido, en el artículo 30, tienen igual categoría “Año Nuevo y Nuestra Señora, Madre de Dios (1 de enero), Corpus Christi, Asunción (15 de agosto), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre). Asimismo, el artículo 28 posibilita el reconocimiento de otros posibles días festivos mediante “acuerdos celebrados entre las autoridades competentes de la Iglesia Católica y de la República Portuguesa”.

En relación con el cumplimiento de los deberes religiosos en los días festivos se redacta el artículo 3, nº. 3: “La República Portuguesa providenciará en el sentido de posibilitar a los católicos, en los términos de la ley portuguesa, el cumplimiento de los deberes religiosos en los días festivos”; ello ha de relacionarse con los artículos 10 –párrafo C–, y 14, de la Ley de Libertad Religiosa, referida, como es lógico, a los miembros pertenecientes a cualquier confesión religiosa. Tal providencia –recogida en el Concordato con vistas hacia el futuro– aún no ha sido convenientemente desarrollada en Portugal⁴⁰.

El clero y la organización eclesiástica

El clero cuenta, en virtud de su condición, con una serie de reconocimientos que se vinculan al ejercicio de sus funciones. Existe, al respecto, un cierto paralelismo entre los artículos 5, 6 y 7 del vigente Concordato con los 12, 13 y 16 del de 1940, respectivamente.

Se considera en el actual artículo 5 que “los eclesiásticos no pueden ser preguntados por los magistrados u otras autoridades sobre hechos y cosas de que hayan tenido conocimiento por motivo de su ministerio”. En tanto, en el 6 se reconoce que “los eclesiásticos no tienen la obligación de asumir los cargos de jurados, miembros de tribunales y otros de la misma naturaleza, considerados por el derecho canónico como incompatibles con el estado eclesiástico”.

³⁹ PIRES FERREIRA, S., *As pessoas jurídicas canónicas na nova Concordata*, disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Sebastiao_Ferreira.htm, p., 2. Valora este autor el asunto de las personas jurídicas constituidas desde el Derecho Canónico en relación con este Concordato.

⁴⁰ Así se afirma en MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 2.

Ya en el artículo 7, lo que el Estado asegura es “la protección de los lugares de culto y de los eclesiásticos en el ejercicio de su ministerio”.

También ha de considerarse como un derecho del clero el hecho de que, tal como se recoge en el artículo 17, número 4, del Concordato vigente, puede cumplir “sus obligaciones militares en la forma de asistencia católica a las fuerzas armadas y de seguridad, sin perjuicio del derecho de objeción de conciencia”, derecho éste que, en congruencia con la valoración actual del principio de libertad religiosa, se incorpora a un texto que parte del artículo 14 del Concordato de 1940.

Los artículos 8 al 12 del Concordato de 2004 se ocupan de la organización de la Iglesia católica en Portugal. En primer término, en el artículo 8, se hace reconocimiento expreso, por parte de la República Portuguesa, de “la personalidad jurídica de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en los términos definidos por los estatutos aprobados por la Santa Sede”. Los cánones 447 al 459 –en lo que respecta, propiamente, al Derecho Canónico– y la Carta “Apostólos Suos”, de 21 de mayo de 1998⁴¹, aportan la concreción de un organismo eclesiástico idóneo, en este sentido, ya que se vincula de una manera estricta a un determinado territorio, en este caso al portugués; en concordancia con esta concreta relación de la Iglesia católica con el territorio de un Estado en particular se entiende lo que se recoge en el apartado 5 del artículo 9: “La Santa Sede declara que ninguna parte del territorio de la República Portuguesa dependerá de un obispo cuya sede esté fijada en territorio sujeto a la soberanía extranjera”.

Asimismo, según el artículo 9, número 1, “la Iglesia católica puede libremente crear, modificar o extinguir, en los términos del derecho canónico, diócesis, parroquias y otras jurisdicciones eclesiásticas”, a las que la República Portuguesa les reconoce su personalidad jurídica (n.º 2), también a efectos civiles (artículo 10.1). Asimismo, se dispone en el artículo 11 que tales personas jurídicas “se rigen por el derecho canónico y por el derecho portugués aplicados por las respectivas autoridades y tienen la misma capacidad civil que el derecho portugués atribuye a las personas colectivas de idéntica naturaleza”; por ello –y según el artículo 12– “gozan de los derechos y beneficios atribuidos a las personas colectivas privadas con fines de la misma naturaleza”.

Se contempla también en el Concordato el modo en que se reconocerá la personalidad jurídica civil de las personas jurídicas canónicas que se constituyan o que sean comunicadas con posterioridad a la entrada en vigor de este Concordato; en este sentido se dispone en su artículo 10, número 3, el reconocimiento “a través de la inscripción en el registro propio del Estado en vir-

⁴¹ SATURINO GOMES, M., *A nova..., op. cit.*

tud de documento emitido por la autoridad eclesiástica competente en donde conste su fundación, fin, identificación, órganos representativos y respectivas competencias”.

En el nuevo Concordato se reconoce que “el nombramiento y cambio de los obispos son de exclusiva competencia de la Santa Sede, que de ellas informa a la República portuguesa” (artículo 9, número 4); de este modo deja de existir el derecho que tenía el Estado de consulta en el Concordato de 1940 (artículo 10). Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que se trataba anteriormente de un derecho que únicamente implicaba escuchar, por parte de la Santa Sede, las posibles “objeciones de carácter político general” en relación con quien iba a ser nombrado, lo que, estrictamente, no suponía derecho de veto.

El matrimonio canónico

Al matrimonio se refieren los artículos 13 al 16 del presente Concordato. En este sentido, los contenidos del texto de 1940 y del Protocolo Adicional de 1975 se respetan en su práctica generalidad.

Que en el artículo 15, número 2, se recoja, en nombre de la Santa Sede, la doctrina de la Iglesia católica relativa a la indisolubilidad del vínculo matrimonial, recordando “a los cónyuges que contraigan el matrimonio canónico el grave deber que les incumbe de no valerse de la facultad civil de requerir el divorcio”, no impide que este último se lleve a cabo. En este sentido, el Concordato de 1940 señalaba que “por el propio hecho de la celebración del casamiento canónico, los cónyuges renunciaron a la facultad civil de requerir el divorcio, que por eso no podrá ser aplicado por los tribunales civiles a los casamientos canónicos”.

Resulta novedoso para el marco concordatario portugués el artículo 16, referido a la nulidad y a la decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado, inspirado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, ratificado el 4 de diciembre de 1979, VI, 2⁴². El reconocimiento civil de un matrimonio canónico no consumado resulta, en todo caso, también, nuevo⁴³.

En el número 2 de dicho artículo 16 se señala que el tribunal competente, civil, verifica –en relación con las decisiones relativas a la nulidad y a la dispensa pontificia del casamiento rato y no consumado– las decisiones del pertinente órgano eclesiástico en una serie de aspectos enumerados en este mismo

⁴² En MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 3 se recoge lo extraño que resulta esta formulación en el Derecho Portugués, a la que dicho autor valora como “norma pésima”.

⁴³ MEJÍA BECERRIL, M., *Juan Pablo II aplaude el nuevo Concordato Iglesia-Estado en Portugal*, disponible en: <http://correo.diocesistoluca.org.mx/nexs/art.php?artid=726&title=JUAN%20PAULO>.

texto⁴⁴; el de más problemática aplicación es el que recoge el apartado “D”: “Si en los resultados no ofenden los principios de orden pública internacional del Estado Portugués”.

La asistencia religiosa católica

En relación con la práctica de la libertad religiosa se entiende, en este nuevo Concordato, que la República Portuguesa garantizará la asistencia religiosa, por parte de la Iglesia católica, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad “que lo solicitasen” (artículo 17, número 1); se asegura que este servicio se prestará “en los términos del derecho canónico y a través de la jurisdicción eclesiástica del un ordinario castrense” (artículo 17, número 2). La forma de establecer dicha asistencia se ha de establecer mediante acuerdo entre “el órgano competente del Estado y la autoridad eclesiástica” (artículo 17, número 3).

Asimismo, se vincula al principio de libertad religiosa “el libre ejercicio de la asistencia religiosa católica a las personas que, por motivo de internamiento, en establecimiento de salud, de asistencia, de educación o similar, o detención en establecimiento penitenciario o similar, estén impedidas de ejercer, en condiciones normales, el derecho de libertad religiosa si así lo solicitasen” (artículo 18).

Los contenidos de los artículos 17 y 18 del ya vigente Concordato eran considerados en el anterior sin partir, lógicamente, de esa consideración de la libertad religiosa, propia del momento actual.

La educación

También es la aplicación del principio de libertad religiosa la que inspira las relaciones entre la Santa Sede y la República Portuguesa en el ámbito educativo en este nuevo Concordato. Ello supone derogar el planteamiento anterior que consideraba, en su artículo 21, que “la enseñanza impartida por el Estado en las escuelas públicas será orientada por los principios de la doctrina y moral cristianas tradicionales en el País”.

Ahora se considera, en primer lugar, la enseñanza de la religión y moral católicas en los centros de enseñanza pública no superior asegurando su docencia “en los términos del derecho portugués” (artículo 19, número 1); asimismo, su estudio depende de la declaración del interesado, si tiene capacidad legal para ello, de los padres o de su representante legal (artículo 19, número 2); así pues, la enseñanza de la religión y la moral católicas figuran en el plan de estudios integradas en el sistema escolar y como una opción para los estudiantes.

⁴⁴ Sobre su aplicación véase lo apuntado por MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 3 y 4.

Quien enseñe estas materias debe tener certificada su idoneidad por la autoridad eclesiástica competente, “en los términos previstos por el derecho portugués y por el derecho canónico” (artículo 19, número 3). Dichos profesores serán “nombrados o contratos, transferidos y excluidos del ejercicio de la docencia de la disciplina por el Estado de acuerdo con la autoridad eclesiástica competente” (artículo 19, número 4). Los contenidos que se han de enseñar son “competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica [...] en conformidad con las orientaciones generales del sistema de enseñanza portugués” (artículo 19, número 5). Se adapta, de este modo, el texto del Concordato a la legislación que, sobre este asunto, se había aprobado en los últimos años.

El artículo 20 –tanto en el Concordato de 2004 como en el de 1940– se ocupa de reconocer el derecho de la Iglesia católica a “constituir seminarios y otros establecimientos de formación y cultura eclesiástica”. El reconocimiento de los efectos civiles de los estudios en ellos impartidos es, desde el texto de 2004, “regulado por el derecho portugués, sin cualquier forma de discriminación relativa a los estudios de idéntica naturaleza” (artículo 20, número 3).

Pero si en el Concordato de 1940 las llamadas “escuelas particulares paralelas a las del Estado” –establecidas y mantenidas libremente por las asociaciones y organizaciones de la Iglesia católica– se integraban entre los centros a los que se refiere el artículo 20, en el nuevo texto concordatario son objeto de un artículo diferente –el 21–. La República Portuguesa garantiza a la Iglesia católica, precisamente desde el ámbito de la libertad de enseñanza, “el derecho de establecer y orientar escuelas en todos los niveles de enseñanza y formación, de acuerdo con el derecho portugués, sin estar sujetas a cualquier forma de discriminación”, siendo sus grados, títulos y diplomas “reconocidos en los términos establecidos por el derecho portugués para escuelas semejantes en naturaleza y calidad”.

Se le otorga, además, en este Concordato de 2004, un particular reconocimiento a la Universidad Católica Portuguesa, entendiendo que “desenvuelve su actividad de acuerdo con el derecho portugués” (artículo 21, número 3)⁴⁵.

El patrimonio cultural de la Iglesia católica

Los artículos 22, 23 y 24 del nuevo Concordato se refieren al patrimonio cultural vinculado a la Iglesia católica en Portugal –cerca del 75% del total⁴⁶–;

⁴⁵ Esa mención expresa a la Universidad Católica Portuguesa ha sido entendida por Mendoça Correia como una “norma sumamente reprochable”, porque deja a dicho centro universitario en una “situación inadmisiblemente indefinida”, en MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 4.

⁴⁶ SERRA, F., *Algumas notas sobre o regime do Património na nova Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa*, disponible en: http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Filipe_Serra.htm.

en particular, el contenido del 23 es totalmente novedoso, mientras que el 22 y el 24 parten respectivamente, con las debidas matizaciones, de los contenidos de los artículos 6 y 7 del anterior texto. Hay que tener en cuenta que Portugal contaba ya con un marco jurídico al respecto que tenía como referencia fundamental la Ley número 13/85, del 6 de julio, de Patrimonio Cultural.

El actual artículo 22 parte del 6 del anterior Concordato, referente a los inmuebles “que estaban o han sido clasificados como «monumentos nacionales» o como «interés público»” y que “continúan con destino permanente al servicio de la Iglesia”. Ha de tenerse en cuenta, en este sentido, que aun cuando en el anterior texto se reconocía a tales bienes ese destino eclesiástico, sin embargo se les entendía como “propiedad del Estado”⁴⁷, algo que se mantiene, pero que no se explicita, en la última redacción pactada. Esto, como indica don José Policarpo, presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, “no da a las respectivas instancias estatales ningún derecho de forzar o alterar esos criterios de utilización del espacio eclesiástico, pues es claro, en la orden concordataria, que la gestión de la utilización de los espacios de las Iglesias es de exclusiva competencia de las autoridades eclesiásticas”⁴⁸.

El mantenimiento de las funciones religiosas para estos inmuebles no se contradice con el reconocimiento, también, de su valor monumental e interés público –al cuidado directo del Estado–; ello explica que, tanto en 1940 como en 2004 se diga que “en la dirección de los cuales podrá intervenir un funcionario nombrado por el Estado”.

Una novedad que se debe considerar –en lo que respecta a los contenidos del artículo 22 relacionados con el 6 anterior– es que ahora “los responsables del Estado y de la Iglesia pueden acordar ceder temporalmente objetos religiosos para ser usados en el respectivo lugar de origen o en otro local apropiado”, lo que supone posibilitar una cierta movilidad, hasta ahora no prevista, de dicho patrimonio cultural.

El artículo 23, número 1, del Concordato de 2004 incide en la puesta en valor del patrimonio cultural del que es propietario tanto la Iglesia católica como las personas jurídicas canónicas reconocidas y que forma parte del patrimonio cultural portugués. Su salvaguarda, recuperación y disfrute se entienden como un empeño común de la República Portuguesa⁴⁹ y de la Iglesia católica, por lo que ha de imperar el principio de cooperación partiendo del criterio, reconocido por la República, de que “la finalidad propia de los bienes ecle-

⁴⁷ Esa propiedad estatal ha de vincularse a los efectos de la Ley de Separación del Estado de las Iglesias de 1911. Véase al respecto SERRA, F., *Algumas notas...*, *op. cit.*, p.1.

⁴⁸ Discurso de Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en la apertura de los trabajos de su 157ª Asamblea Plenaria.

⁴⁹ Así se expresa en la Ley del Patrimonio Cultural, en su artículo 4.

siásticos debe de ser salvaguardada por el derecho portugués”, lo que se ha de conciliar con otras “finales derivadas de su naturaleza cultural” (número 2).

Una nueva comisión bilateral, formada por “autoridades competentes” –tanto de la República Portuguesa como de la Iglesia católica–, es la encargada de desarrollar ese principio de la cooperación (número 3), con el objetivo de “promover la salvaguarda, puesta en valor y disfrute de los bienes de la Iglesia, en particular a través del apoyo del Estado y de otras entidades públicas” (número 4)⁵⁰.

Resulta asimismo novedoso, con respecto al Concordato anterior lo que se recoge en el actual artículo 24, número 3, dado que se reconoce que “la autoridad eclesiástica competente tiene derecho a la audiencia previa, cuando fueran necesarias obras o cuando se inicie procedimiento de inventariado o clasificación, como bien cultural”, en consonancia con lo que dice al respecto la Ley de Libertad Religiosa en su artículo 30, número 2⁵¹.

Asuntos económicos

Los artículos 25, 26 y 27 del nuevo Concordato se centran en los asuntos económicos referentes a las relaciones entre la Iglesia Católica y la República Portuguesa.

En el artículo 25 se hace mención a un empeño de la República que consiste en destinar espacios a fines religiosos, algo que, aunque no se refiere exclusivamente a la Iglesia católica, le beneficia especialmente, habida cuenta de que “tiene el derecho de audiencia previa, que debe ser ejercido en los términos de derecho portugués, en cuanto a las decisiones relativas a destinos de espacios a fines religiosos en instrumentos de planeamiento territorial”; aun cuando ese derecho de “audiencia previa” –justificable teniendo en cuenta la gran mayoría de la población católica en Portugal– pudiera, en el futuro, entenderse como un privilegio, si se tiene en cuenta la posibilidad de que, con el paso del tiempo, determinadas minorías –de otras confesiones– puedan tener en algún territorio concreto una presencia significativa, merecedora de un tratamiento justo desde los criterios de la propia ley de Libertad Religiosa portuguesa.

El artículo 26 señala los ingresos de la Iglesia católica que no están sujetos a impuestos, las propiedades exentas de “cualquier impuesto o contri-

⁵⁰ Su puesta en marcha ha sido entendida como “un instrumento decisivo” a la hora de “deshacer algunas reservas mentales, relativas, por ejemplo, a la comunicabilidad entre las diversas bases de datos institucionales dos inventarios, desconfianzas, además, absolutamente legítimas por parte de la Iglesia, si atendemos a los antecedentes históricos, nada brillantes en estas materias, en SERRA, F., *Algumas notas...*, *op. cit.*, p. 4.

⁵¹ Véase lo que, en relación con este artículo, se dice en MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 5.

bución general, regional o local” y las transmisiones igualmente eximidas de impuestos.

En el número 5 de este mismo artículo se señala que las personas jurídicas canónicas, que desempeñan actividades distintas de las religiosas, como las de solidaridad social, educación y cultura, así como las de carácter comercial y lucrativo, “quedan sujetas al régimen fiscal aplicable a la respectiva actividad”.

Por otra parte –se recoge en el número 6 del artículo 25– “los donativos hechos a personas jurídicas canónicas” tienen una consideración fiscal, en este caso como deducción, “en los términos del derecho portugués”.

El Concordato de 1940 recogía en su artículo 8 –en el que se inspira el 26 del texto acordado en 2004– la exención de impuestos de “los eclesiásticos por el ejercicio de su oficio espiritual”. A partir del nuevo Concordato el clero portugués está sujeto al pago de impuestos.

Tal como señala el profesor Braga da Cruz, se diferencia en la redacción del artículo 26 entre “la persecución de fines religiosos” y aquellas otras “actividades con fines diversos de los religiosos”, lo que, desde su criterio, “clarifica lo que es estrictamente pastoral de lo que no lo es, y continua subrayando la importancia cultural y social que el Estado atribuye a la religión en general y, en particular a la religión católica”⁵².

El reconocimiento, desde el Concordato, de “actividades con fines diversos de los religiosos”, que pueden ser objeto de inspección, exigirá, según entiende el profesor Pires Ferreira, “una rigurosa y transparente contabilidad, a través de la cual será hecha la fiscalización de la buena o mala gestión de los dineros que, gracias a las ayudas del Estado, tiene que administrar y dar razones de su aplicabilidad. A esta exigencia estarán sujetas las instituciones (¿parroquia?) que tengan que ver con las fábricas de las iglesias, las cofradías, los centros parroquiales y sociales y todas las otras instituciones... Que este nuevo Concordato ayude a la organización de un sistema de contabilidad de transparencia para que acaben ciertos escenarios oscuros”⁵³.

El artículo 27, en su número 1, reconoce que “la Conferencia Episcopal Portuguesa puede ejercer el derecho de incluir a la Iglesia Católica en el sistema de percepción de recetas fiscales previsto en el derecho portugués”, algo que “puede ser objeto de acuerdo entre los competentes órganos de la República y las autoridades eclesiásticas competentes”.

En este sentido, hay que recordar que el artículo 32 de la Ley de Libertad Religiosa portuguesa dispone que una cuota equivalente al 0,5% del impues-

⁵² BRAGA DA CRUZ, M., *A Concordata e as relações Igreja-Estado*, disponible en: <http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/ManuelCruz.htm>.

⁵³ PIRES FERREIRA, S., *As pessoas jurídicas...*, *op. cit.*, p. 4.

to sobre el rendimiento de las personas singulares, liquidado como base en las declaraciones anuales, puede ser destinada por el contribuyente para fines religiosos, o de beneficencia, a una iglesia o comunidad religiosa radicada en Portugal; en este contexto legal es en el que cabe entender la aplicación del citado artículo 27 del vigente Concordato, algo que, por otra parte, suscita dudas sobre su conveniencia⁵⁴.

Disposiciones finales

Finalmente, de los tres últimos artículos del nuevo Concordato, el 31 se ocupa de cautelar las situaciones jurídicas relacionadas con el anterior texto; el 32, de elaborar, revisar y publicar la legislación eventualmente necesaria, tanto por parte de la República Portuguesa como por la de la Santa Sede; y el 33, de la entrada en vigor del nuevo texto.

Merecen una cita especial, asimismo –con respecto a la aplicación en el futuro de este Concordato–, sus artículos 3 (número 2), 4, 23 (número 3), 27 (número 2), 28, 29 y 30.

Valoraciones sobre el nuevo Concordato

El cardenal-patriarca don José Policarpo valoró muy positivamente el hecho de que este nuevo marco de relaciones, fijado entre la Santa Sede y la República en el año 2004, se atuviese a mantener un régimen concordatario, por lo que, desde su criterio, implica “reconocer ese estatuto de la Iglesia, que las grandes líneas de fuerza inspiradoras de la Iglesia Católica, que está en Portugal como en otros países, son comunes y su órgano representativo es la Sede de Pedro, a la que vulgarmente llamamos Santa Sede”⁵⁵.

Como señala la profesora Cobo al respecto, “que a fecha de hoy, siglo XXI, se firme un Concordato es un detonante de que esta figura es útil en las relaciones de las Iglesias con el Estado desde la perspectiva absolutamente dualista. Dicho de otra manera la firma de este Concordato supone la validez del Concordato como instrumento jurídico y engarza el pasado adecuándolo al presente”⁵⁶.

El mismo cardenal-patriarca portugués pone de relieve que este Concordato “valore desde el principio la cooperación entre la Iglesia y el Estado para el bien de la sociedad y para la instauración de una sociedad ausente en

⁵⁴ En MENDOÇA CORREIA, “A quen ler...”, *op. cit.*, p. 5.

⁵⁵ *Cardeal-Patriarca e a nova Concordata...*, *op. cit.*

⁵⁶ COBO, M. I., *Comentário à Concordata*, disponible en: <http://www.ucp.pt/cedc/Materiais/Ines-Cobo.html>.

valores que promuevan la justicia, la fraternidad y la paz [...]. De parte de la Iglesia significa aceptar coordinar su acción sin perder su especificidad, con todos los ciudadanos de buena voluntad, con todos los componentes que entran en la construcción compleja del tejido de las sociedades contemporáneas [...]. Es particularmente por parte del Estado, porque continuando en afirmarse laico, en régimen de separación Iglesia-Estado que nunca fue puesto en cuestión y que supone una evolución positiva en la concepción de la laicidad del Estado”⁵⁷.

El propio cardenal-patriarca don José Policarpo valora como una solución original, en el derecho concordatario moderno, la creación de una comisión paritaria porque, de este modo, “siempre que hubiese dudas sobre la aplicación del Concordato la Iglesia y el Estado tienen un órgano permanente con dos representantes de cada uno, que hará propuestas necesarias para la eliminación de esas dudas y analizará lo que es necesario para la ejecución de la Concordia, que va implicar numerosos acuerdos”⁵⁸.

También ha sido considerado este Concordato como “de separación que no crea dependencias de la Iglesia en relación al Estado o viceversa, de cooperación, creando mecanismos para que ambos colaboren para el bien común, y que no contiene privilegios, no crea excepciones, de beneficio para la Iglesia, adapta los principios generales de la Ley de la Libertad Religiosa, del derecho estatal y del derecho canónico”.

La concreción de este nuevo Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa es, por lo demás, un adecuado testimonio de que este tipo de tratado sigue siendo plenamente actual⁵⁹.

⁵⁷ *Cardenal-Patriarca e a nova Concordata...*, *op. cit.*

⁵⁸ *Idem*, p. 2.

⁵⁹ GÍMENEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., *Los Concordatos...*, *op. cit.*, p. 39.

Apéndice (documentación)

Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa, 18 de mayo de 2004⁶⁰.

**CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA PORTOGHESE
18 MAGGIO 2004**

La Santa Sede e la Repubblica Portoghese,

affermando che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e indipendenti;

considerando i profondi rapporti storici tra la Chiesa Cattolica e il Portogallo e tenendo presenti le reciproche responsabilità che li vincolano, nell'ambito della libertà religiosa, al servizio del bene comune e all'impegno nella costruzione di una società che promuova la dignità della persona umana, la giustizia e la pace;

riconoscendo che il Concordato del 7 maggio 1940, stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, e la sua applicazione hanno contribuito in maniera rilevante a rinsaldare i loro legami storici e a consolidare l'attività della Chiesa Cattolica in Portogallo a beneficio dei suoi fedeli e della comunità portoghese in generale;

rilevando che si rende necessario un aggiornamento a causa delle profonde trasformazioni avvenute ai livelli nazionale ed internazionale, in particolare, per quanto si riferisce all'ordinamento giuridico portoghese, la nuova Costituzione democratica, aperta a norme del diritto comunitario e del diritto internazionale contemporaneo, e, per quanto concerne la Chiesa, l'evoluzione dei suoi rapporti con la comunità politica;

convengono di stipulare il presente Concordato, nei termini seguenti:

**CONCORDATA
ENTRE A SANTA SÉ
E A REPÚBLICA PORTUGUESA
18 Maio 2004**

A Santa Sé e a República Portuguesa,

Afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes;

Considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as mútuas responsabilidades que os vinculam, no âmbito da liberdade religiosa, ao serviço do bem comum e ao empenho na construção de uma sociedade que promova a dignidade da pessoa humana, a justiça e a paz;

Reconhecendo que a Concordata de 7 de Maio de 1940, celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa, e a sua aplicação contribuíram de maneira relevante para reforçar os seus laços históricos e para consolidar a actividade da Igreja Católica em Portugal em benefício dos seus fiéis e da comunidade portuguesa em geral;

Entendendo que se torna necessária uma actualização em virtude das profundas transformações ocorridas nos planos nacional e internacional: de modo particular, pelo que se refere ao ordenamento jurídico português, a nova Constituição democrática, aberta a normas do direito comunitário e do direito internacional contemporâneo, e, no âmbito da Igreja, a evolução das suas relações com a comunidade política;

Acordam em celebrar a presente Concordata, nos termos seguintes:

⁶⁰ Disponible en: <http://www.ucp.pt/cedc/Noticias/Concordata2004.html>.

Articolo 1

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese dichiarano l'impegno dello Stato e della Chiesa Cattolica nella cooperazione per la promozione della dignità della persona umana, della giustizia e della pace.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

3. Le relazioni fra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico presso la Repubblica Portoghese e un Ambasciatore di Portogallo presso la Santa Sede.

Articolo 2

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica e garantisce il pubblico e libero esercizio delle sue attività, segnatamente quelle di culto, magistero e ministero, nonché la giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. La Santa Sede può liberamente approvare e pubblicare qualsiasi norma, disposizione o documento relativi all'attività della Chiesa e comunicare senza impedimento con i Vescovi, il clero e i fedeli, potendo questi fare altrettanto con la Santa Sede.

3. I Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche godono della medesima libertà riguardo al clero e ai fedeli.

4. Alla Chiesa Cattolica, ai suoi fedeli e alle persone giuridiche che si costituiscono a norma del diritto canonico, è riconosciuta la libertà religiosa, segnatamente negli ambiti di coscienza, culto,

Artigo 1

1. A Santa Sé e a República Portuguesa declaram o empenho do Estado e da Igreja Católica na cooperação para a promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz.

2. A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica.

3. As relações entre a Santa Sé e a República Portuguesa são asseguradas mediante um Núncio Apostólico junto da República Portuguesa e um Embaixador de Portugal junto da Santa Sé.

Artigo 2

1. A República Portuguesa reconhece à Igreja Católica o direito de exercer a sua missão apostólica e garante o exercício público e livre das suas actividades, nomeadamente as de culto, magistério e ministério, bem como a jurisdição em matéria eclesiástica.

2. A Santa Sé pode aprovar e publicar livremente qualquer norma, disposição ou documento relativo à actividade da Igreja e comunicar sem impedimento com os bispos, o clero e os fiéis, tal como estes o podem com a Santa Sé.

3. Os bispos e as outras autoridades eclesiásticas gozam da mesma liberdade em relação ao clero e aos fiéis.

4. É reconhecida à Igreja Católica, aos seus fiéis e às pessoas jurídicas que se constituam nos termos do direito canónico a liberdade religiosa, nomeadamente nos domínios da consciência, culto, reunião,

riunione, associazione, espressione pubblica, insegnamento e attività caritativa.

Articolo 3

1. La Repubblica Portoghese riconosce le domeniche come giorni festivi.

2. Gli altri giorni riconosciuti come festivi cattolici sono definiti di comune accordo a norma dell'articolo 28.

3. La Repubblica Portoghese provvederà affinché sia reso possibile ai cattolici, nei termini della legge portoghese, l'adempimento dei doveri religiosi nei giorni festivi.

Articolo 4

La cooperazione, di cui al n. 1 dell'articolo 1, può includere attività svolte nell'ambito di Organizzazioni internazionali delle quali facciano parte la Santa Sede e la Repubblica Portoghese oppure, senza venir meno al rispetto del diritto internazionale, altre azioni congiunte, bilaterali o multilaterali, in particolare nel territorio dei Paesi di lingua ufficiale portoghese.

Articolo 5

Gli ecclesiastici non possono essere interrogati dai magistrati o da altre autorità in merito a fatti e cose di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Articolo 6

Gli ecclesiastici non hanno l'obbligo di assumere le cariche di giurati, di membri

associação, expressão pública, ensino e acção caritativa.

Artigo 3

1. A República Portuguesa reconhece como dias festivos os Domingos.

2. Os outros dias reconhecidos como festivos católicos são definidos por acordo nos termos do artigo 28.

3. A República Portuguesa providenciará no sentido de possibilitar aos católicos, nos termos da lei portuguesa, o cumprimento dos deveres religiosos nos dias festivos.

Artigo 4

A cooperação referida no n.º 1 do artigo 1 pode abranger actividades exercidas no âmbito de organizações internacionais em que a Santa Sé e a República Portuguesa sejam partes ou, sem prejuízo do respeito pelo direito internacional, outras acções conjuntas, bilaterais ou multilaterais, em particular no espaço dos Países de língua oficial portuguesa.

Artigo 5

Os eclesiásticos não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos e coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério.

Artigo 6

Os eclesiásticos não têm a obrigação de assumir os cargos de jurados, membros de

di tribunali e altre della stessa natura, dal diritto canonico considerate incompatibili con lo stato ecclesiastico.

Articolo 7

La Repubblica Portoghese assicura, nei termini del diritto portoghese, le misure necessarie per la protezione dei luoghi di culto e degli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, nonché per evitare l'uso illegittimo di pratiche o mezzi cattolici.

Articolo 8

La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Conferenza Episcopale Portoghese, nei termini definiti dagli statuti approvati dalla Santa Sede.

Articolo 9

1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a norma del diritto canonico, diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica delle diocesi, delle parrocchie e di altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che l'atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al competente organo dello Stato.

3. Gli atti di modifica o estinzione delle diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero precedente, saranno notificati al competente organo dello Stato.

tribunais e outros da mesma natureza, considerados pelo direito canónico como incompatíveis com o estado eclesiástico.

Artigo 7

A República Portuguesa assegura, nos termos do direito português, as medidas necessárias à protecção dos lugares de culto e dos eclesiásticos no exercício do seu ministério e bem assim para evitar o uso ilegítimo de práticas ou meios católicos.

Artigo 8

A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Conferência Episcopal Portuguesa, nos termos definidos pelos estatutos aprovados pela Santa Sé.

Artigo 9

1. A Igreja Católica pode livremente criar, modificar ou extinguir, nos termos do direito canónico, dioceses, paróquias e outras jurisdições eclesiásticas.

2. A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica das dioceses, paróquias e outras jurisdições eclesiásticas, desde que o acto constitutivo da sua personalidade jurídica canónica seja notificado ao órgão competente do Estado.

3. Os actos de modificação ou extinção das dioceses, paróquias e outras jurisdições eclesiásticas, reconhecidas nos termos do número anterior, serão notificados ao órgão competente do Estado.

4. La nomina e la rimozione dei Vescovi sono di esclusiva competenza della Santa Sede, che ne informa la Repubblica Portoghese.

5. La Santa Sede dichiara che nessuna parte del territorio della Repubblica Portoghese dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede in territorio soggetto a sovranità straniera.

Articolo 10

1. La Chiesa Cattolica in Portogallo può organizzarsi liberamente in armonia con le norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica civile.

2. Lo Stato riconosce la personalità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 1, 8 e 9, nei termini rispettivamente indicati, come anche la personalità delle restanti persone giuridiche canoniche, inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano state costituite e comunicate alla competente autorità dal Vescovo della diocesi dove esse hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante, fino alla data di entrata in vigore del presente Concordato.

3. Alle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite negli articoli 1, 8 e 9, che si costituiscono o siano comunicate dopo l'entrata in vigore del presente Concordato, è riconosciuta la personalità giuridica civile mediante l'iscrizione nell'apposito registro dello Stato in forza di un documento autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la loro erezione, gli scopi, l'identità,

4. A nomeação e remoção dos bispos são da exclusiva competência da Santa Sé, que delas informa a República Portuguesa.

5. A Santa Sé declara que nenhuma parte do território da República Portuguesa dependerá de um bispo cuja sede esteja fixada em território sujeito a soberania estrangeira.

Artigo 10

1. A Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente de harmonia com as normas do direito canónico e constituir, modificar e extinguir pessoas jurídicas canónicas a que o Estado reconhece personalidade jurídica civil.

2. O Estado reconhece a personalidade das pessoas jurídicas referidas nos artigos 1, 8 e 9 nos respectivos termos, bem como a das restantes pessoas jurídicas canónicas, incluindo os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica canonicamente erectos, que hajam sido constituídas e participadas à autoridade competente pelo bispo da diocese onde tenham a sua sede, ou pelo seu legítimo representante, até à data da entrada em vigor da presente Concordata.

3. A personalidade jurídica civil das pessoas jurídicas canónicas, com excepção das referidas nos artigos 1, 8 e 9, quando se constituírem ou forem comunicadas após a entrada em vigor da presente Concordata, é reconhecida através da inscrição em registo próprio do Estado em virtude de documento autêntico emitido pela autoridade eclesiástica competente de onde conste a sua erecção, fins,

gli organi rappresentativi e le rispettive competenze.

Articolo 11

1. Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 8, 9 e 10, sono regolate dal diritto canonico e dal diritto portoghese, applicati dalle rispettive autorità, e hanno la stessa capacità civile che il diritto portoghese attribuisce alle persone collettive di identica natura.

2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche sono opponibili a terzi in buona fede a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3 dell'articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche.

Articolo 12

Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi dell'articolo 10, che, oltre a finalità religiose, perseguano scopi di assistenza e di solidarietà, svolgono la rispettiva attività secondo l'ordinamento giuridico stabilito dal diritto portoghese e godono dei diritti e benefici concessi alle persone collettive private con scopi della stessa natura.

Articolo 13

1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia tra-

identificação, órgãos representativos e respectivas competências.

Artigo 11

1. As pessoas jurídicas canónicas reconhecidas nos termos dos artigos 1, 8, 9 e 10 regem-se pelo direito canónico e pelo direito português, aplicados pelas respectivas autoridades, e têm a mesma capacidade civil que o direito português atribui às pessoas colectivas de idêntica natureza.

2. As limitações canónicas ou estatutárias à capacidade das pessoas jurídicas canónicas só são oponíveis a terceiros de boa fé desde que constem do Código de Direito Canónico ou de outras normas, publicadas nos termos do direito canónico, e, no caso das entidades a que se refere o n.º 3 do artigo 10 e quanto às matérias aí mencionadas, do registo das pessoas jurídicas canónicas.

Artigo 12

As pessoas jurídicas canónicas, reconhecidas nos termos do artigo 10, que, além de fins religiosos, prossigam fins de assistência e solidariedade, desenvolvem a respectiva actividade de acordo com o regime jurídico instituído pelo direito português e gozam dos direitos e benefícios atribuídos às pessoas colectivas privadas com fins da mesma natureza.

Artigo 13

1. O Estado português reconhece efeitos civis aos casamentos celebrados em conformidade com as leis canónicas, desde que o respectivo assento de casamento

scritto negli appositi registri dello stato civile.

2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.

3. I matrimoni *in articulo mortis*, nell'imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.

4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.

5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.

Articolo 14

1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.

seja transcrito para os competentes livros do registo civil.

2. As publicações do casamento fazem-se, não só nas respectivas igrejas paroquiais, mas também nas competentes repartições do registo civil.

3. Os casamentos *in articulo mortis*, em iminência de parto, ou cuja imediata celebração seja expressamente autorizada pelo ordinário próprio por grave motivo de ordem moral, podem ser contraídos independentemente do processo preliminar das publicações.

4. O pároco envia dentro de três dias cópia integral do assento do casamento à repartição competente do registo civil para ser aí transcrita; a transcrição deve ser feita no prazo de dois dias e comunicada pelo funcionário respectivo ao pároco até ao dia imediato àquele em que foi feita, com indicação da data.

5. Sem prejuízo das obrigações referidas no n.º 4, cujo incumprimento sujeita o respectivo responsável à efectivação das formas de responsabilidade previstas no direito português e no direito canónico, as partes podem solicitar a referida transcrição, mediante a apresentação da cópia integral da acta do casamento.

Artigo 14

1. O casamento canónico produz todos os efeitos civis desde a data da celebração, se a transcrição for feita no prazo de sete dias. Não o sendo, só produz efeitos relativamente a terceiros, a contar da data da transcrição.

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.

Articolo 15

1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.

2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.

2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:

- a) se sono autentiche;
- b) se provengono dal tribunale competente;
- c) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e
- d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

2. Não obsta à transcrição a morte de um ou de ambos os cônjuges.

Artigo 15

1. Celebrando o casamento canónico os cônjuges assumem por esse mesmo facto, perante a Igreja, a obrigação de se aterem às normas canónicas que o regulam e, em particular, de respeitarem as suas propriedades essenciais.

2. A Santa Sé, reafirmando a doutrina da Igreja Católica sobre a indissolubilidade do vínculo matrimonial, recorda aos cônjuges que contraírem o matrimónio canónico o grave dever que lhes incumbe de se não valerem da faculdade civil de requerer o divórcio.

Artigo 16

1. As decisões relativas à nulidade e à dispensa pontificia do casamento rato e não consumado pelas autoridades eclesiasísticas competentes, verificadas pelo órgão eclesiasístico de controlo superior, produzem efeitos civis, a requerimento de qualquer das partes, após revisão e confirmação, nos termos do direito português, pelo competente tribunal do Estado.

2. Para o efeito, o tribunal competente verifica:

- a) Se são autênticas;
- b) Se dimanam do tribunal competente;
- c) Se foram respeitados os princípios do contraditório e da igualdade; e
- d) Se nos resultados não ofendem os princípios da ordem pública internacional do Estado português.

Articolo 17

1. La Repubblica Portoghese garantisce il libero esercizio della libertà religiosa mediante l'assistenza religiosa cattolica ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano, e anche mediante la pratica dei rispettivi atti di culto.

2. La Chiesa Cattolica assicura, a norma del diritto canonico e per mezzo della giurisdizione ecclesiastica di un'Ordinario castrense, l'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano.

3. L'organo competente dello Stato e l'autorità ecclesiastica competente possono stabilire, mediante intesa, le forme di esercizio e di organizzazione dell'assistenza religiosa nei casi di cui ai numeri precedenti.

4. Gli ecclesiastici possono adempiere gli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa cattolica alle Forze Armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all'obiezione di coscienza.

Articolo 18

La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio dell'assistenza religiosa cattolica alle persone che, a motivo di permanenza in case di cura, di assistenza, di educazione o simili, oppure di detenzione in carcere o istituto simile, si trovino impediti di esercitare, in condizioni normali, il diritto alla libertà religiosa e ne facciano richiesta.

Artigo 17

1. A República Portuguesa garante o livre exercício da liberdade religiosa através da assistência religiosa católica aos membros das forças armadas e de segurança que a solicitarem, e bem assim através da prática dos respectivos actos de culto.

2. A Igreja Católica assegura, nos termos do direito canónico e através da jurisdição eclesiástica de um ordinário castrense, a assistência religiosa aos membros das forças armadas e de segurança que a solicitarem.

3. O órgão competente do Estado e a autoridade eclesiástica competente podem estabelecer, mediante acordo, as formas de exercício e organização da assistência religiosa nos casos referidos nos números anteriores.

4. Os eclesiásticos podem cumprir as suas obrigações militares sob a forma de assistência religiosa católica às forças armadas e de segurança, sem prejuízo do direito de objecção de consciência.

Artigo 18

A República Portuguesa garante à Igreja Católica o livre exercício da assistência religiosa católica às pessoas que, por motivo de internamento em estabelecimento de saúde, de assistência, de educação ou similar, ou detenção em estabelecimento prisional ou similar, estejam impedidas de exercer, em condições normais, o direito de liberdade religiosa e assim o solicitem.

Articolo 19

1. La Repubblica Portoghese, nell'ambito della libertà religiosa e del dovere che spetta allo Stato di cooperare con i genitori nell'educazione dei figli, garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei termini del diritto portoghese, l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione.

2. La frequenza dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori dipende dalla dichiarazione dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

3. In nessun caso l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica può essere svolto da chi non sia ritenuto idoneo da parte dell'autorità ecclesiastica competente, la quale certifica la menzionata idoneità nei termini previsti dal diritto portoghese e dal diritto canonico.

4. Gli insegnanti di Religione e Morale Cattolica vengono nominati oppure vengono assunti a contratto, trasferiti ed esclusi dall'esercizio della docenza della disciplina da parte dello Stato, d'accordo con l'autorità ecclesiastica competente.

5. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica la definizione del contenuto dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità agli orientamenti generali del sistema d'insegnamento portoghese.

Articolo 20

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire

Artigo 19

1. A República Portuguesa, no âmbito da liberdade religiosa e do dever de o Estado cooperar com os pais na educação dos filhos, garante as condições necessárias para assegurar, nos termos do direito português, o ensino da religião e moral católicas nos estabelecimentos de ensino público não superior, sem qualquer forma de discriminação.

2. A frequência do ensino da religião e moral católicas nos estabelecimentos de ensino público não superior depende de declaração do interessado, quando para tanto tenha capacidade legal, dos pais ou do seu representante legal.

3. Em nenhum caso o ensino da religião e moral católicas pode ser ministrado por quem não seja considerado idóneo pela autoridade eclesiástica competente, a qual certifica a referida idoneidade nos termos previstos pelo direito português e pelo direito canónico.

4. Os professores de religião e moral católicas são nomeados ou contratados, transferidos e excluídos do exercício da docência da disciplina pelo Estado de acordo com a autoridade eclesiástica competente.

5. É da competência exclusiva da autoridade eclesiástica a definição do conteúdo do ensino da religião e moral católicas, em conformidade com as orientações gerais do sistema de ensino português.

Artigo 20

1. A República Portuguesa reconhece à Igreja Católica o direito de constituir

seminari e altri istituti di formazione e cultura ecclesiastica.

2. L'ordinamento interno degli istituti di formazione e cultura ecclesiastica non è sottoposto al controllo dello Stato.

3. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, dei gradi e dei titoli ottenuti negli istituti di formazione e cultura ecclesiastica è regolato dal diritto portoghese, senza alcuna forma di discriminazione rispetto agli studi di identica natura.

Articolo 21

1. La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica e alle persone giuridiche canoniche riconosciute nei termini degli articoli dall'8 al 10, nell'ambito della libertà di insegnamento, il diritto di fondare e dirigere scuole in ogni livello di insegnamento e formazione, in accordo col diritto portoghese, senza che siano soggette ad alcuna forma di discriminazione.

2. I gradi, titoli e diplomi ottenuti nelle scuole, di cui al numero precedente, sono riconosciuti nei termini previsti dal diritto portoghese per scuole di simile natura e qualità.

3. L'Università Cattolica Portoghese, eretta dalla Santa Sede il 13 ottobre 1967 e riconosciuta dallo Stato portoghese il 15 luglio 1971, svolge la propria attività in accordo col diritto portoghese, nei termini dei numeri precedenti, obbedendo alla sua specificità istituzionale.

seminários e outros estabelecimentos de formação e cultura eclesiástica.

2. O regime interno dos estabelecimentos de formação e cultura eclesiástica não está sujeito a fiscalização do Estado.

3. O reconhecimento dos efeitos civis dos estudos, graus e títulos obtidos nos estabelecimentos de formação e cultura eclesiástica é regulado pelo direito português, sem qualquer forma de discriminação relativamente a estudos de idêntica natureza.

Artigo 21

1. A República Portuguesa garante à Igreja Católica e às pessoas jurídicas canónicas reconhecidas nos termos dos artigos 8 a 10, no âmbito da liberdade de ensino, o direito de estabelecerem e orientarem escolas em todos os níveis de ensino e formação, de acordo com o direito português, sem estarem sujeitas a qualquer forma de discriminação.

2. Os graus, títulos e diplomas obtidos nas escolas referidas no número anterior são reconhecidos nos termos estabelecidos pelo direito português para escolas semelhantes na natureza e na qualidade.

3. A Universidade Católica Portuguesa, erecta pela Santa Sé em 13 de Outubro de 1967 e reconhecida pelo Estado português em 15 de Julho de 1971, desenvolve a sua actividade de acordo com o direito português, nos termos dos números anteriores, com respeito pela sua especificidade institucional.

Articolo 22

1. Gli immobili che, ai sensi dell'articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940, erano o sono stati classificati come «monumenti nazionali» o come di «interesse pubblico» restano destinati in modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d'accordo con l'autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che riguarda l'orario delle visite, alla guida delle quali potrà intervenire un funzionario nominato dallo Stato.

2. Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti, con responsabilità di fedele depositario.

3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo adatto.

Articolo 23

1. La Repubblica Portoghese e la Chiesa Cattolica dichiarano il loro impegno per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni, mobili ed immobili, che sono di proprietà della Chiesa Cattolica o di persone giuridiche canoniche rico-

Artigo 22

1. Os imóveis que, nos termos do artigo VI da Concordata de 7 de Maio de 1940, estavam ou tenham sido classificados como «monumentos nacionais» ou como de «interesse público» continuam com afectação permanente ao serviço da Igreja. Ao Estado cabe a sua conservação, reparação e restauro de harmonia com plano estabelecido de acordo com a autoridade eclesiástica, para evitar perturbações no serviço religioso; à Igreja incumbe a sua guarda e regime interno, designadamente no que respeita ao horário de visitas, na direcção das quais poderá intervir um funcionário nomeado pelo Estado.

2. Os objectos destinados ao culto que se encontrem em algum museu do Estado ou de outras entidades públicas são sempre cedidos para as cerimónias religiosas no templo a que pertenciam, quando este se ache na mesma localidade onde os ditos objectos são guardados. Tal cedência faz-se a requisição da competente autoridade eclesiástica, que vela pela guarda dos objectos cedidos, sob a responsabilidade de fiel depositário.

3. Em outros casos e por motivos justificados, os responsáveis do Estado e da Igreja podem acordar em ceder temporariamente objectos religiosos para serem usados no respectivo local de origem ou em outro local apropriado.

Artigo 23

1. A República Portuguesa e a Igreja Católica declaram o seu empenho na salvaguarda, valorização e fruição dos bens, móveis e imóveis, de propriedade da Igreja Católica ou de pessoas jurídicas canónicas reconhecidas, que integram o

nosciute e fanno parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

2. La Repubblica Portoghese riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici deve essere salvaguardata dal diritto portoghese, senza nulla togliere alla necessità di conciliarla con altre finalità derivanti dalla loro natura culturale, nel rispetto del principio di cooperazione.

3. Le autorità competenti della Repubblica Portoghese e quelle della Chiesa Cattolica concordano nel creare una Commissione bilaterale per l'incremento della cooperazione riguardante i beni della Chiesa che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare mediante l'aiuto dello Stato e di altri enti pubblici per le necessarie azioni di identificazione, manutenzione, sicurezza, restauro e funzionamento, senza alcuna forma di discriminazione in relazione a beni simili, spettando pure alla medesima Commissione di promuovere, quando sia conveniente, la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 24

1. Nessun tempio, edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico può venire demolito, occupato, spostato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non mediante previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente e per motivo di urgente necessità pubblica.

2. Nei casi di requisizione o espropriazione per utilità pubblica verrà sempre

património cultural português.

2. A República Portuguesa reconhece que a finalidade própria dos bens eclesiais-ticos deve ser salvaguardada pelo direito português, sem prejuízo da necessidade de a conciliar com outras finalidades decorrentes da sua natureza cultural, com respeito pelo princípio da cooperação.

3. As autoridades competentes da República Portuguesa e as da Igreja Católica acordam em criar uma Comissão bilateral para o desenvolvimento da cooperação quanto a bens da Igreja que integrem o património cultural português.

4. A Comissão referida no número anterior tem por missão promover a salvaguarda, valorização e fruição dos bens da Igreja, nomeadamente através do apoio do Estado e de outras entidades públicas às acções necessárias para a identificação, conservação, segurança, restauro e funcionamento, sem qualquer forma de discriminação em relação a bens semelhantes, competendo-lhe ainda promover, quando adequado, a celebração de acordos nos termos do artigo 28.

Artigo 24

1. Nenhum templo, edificio, dependência ou objecto afecto ao culto católico pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou destinado pelo Estado e entidades públicas a outro fim, a não ser mediante acordo prévio com a autoridade eclesiástica competente e por motivo de urgente necessidade pública.

2. Nos casos de requisição ou expropriação por utilidade pública, será sempre

consultata l'autorità ecclesiastica competente, anche per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità. In ogni caso, non sarà esercitato atto alcuno di appropriazione o di utilizzo non religioso, senza che i beni espropriati vengano privati del loro carattere religioso.

3. L'autorità ecclesiastica competente ha il diritto di previa consultazione quando siano necessari restauri o quando si avvii la procedura di inventariazione o classificazione come bene culturale.

Articolo 25

1. La Repubblica Portoghese dichiara il suo impegno a destinare spazi a fini religiosi.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno prevedere la destinazione di spazi a fini religiosi.

3. La Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche hanno il diritto di previa consultazione, da esercitare nei termini del diritto portoghese, per quanto riguarda le decisioni sulla destinazione di spazi a fini religiosi negli strumenti di pianificazione territoriale.

Articolo 26

1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, non sono soggette ad alcuna imposta su:

consultada a autoridade eclesiástica competente, mesmo sobre o quantitativo da indemnização. Em qualquer caso, não será praticado acto algum de apropriação ou utilização não religiosa sem que os bens expropriados sejam privados do seu carácter religioso.

3. A autoridade eclesiástica competente tem direito de audiência prévia, quando forem necessárias obras ou quando se inicie procedimento de inventariação ou classificação como bem cultural.

Artigo 25

1. A República Portuguesa declara o seu empenho na afectação de espaços a fins religiosos.

2. Os instrumentos de planeamento territorial deverão prever a afectação de espaços para fins religiosos.

3. A Igreja Católica e as pessoas jurídicas canónicas têm o direito de audiência prévia, que deve ser exercido nos termos do direito português, quanto às decisões relativas à afectação de espaços a fins religiosos em instrumentos de planeamento territorial.

Artigo 26

1. A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dióceses e demais jurisdições eclesiásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas pelas competentes autoridades eclesiásticas para a prossecução de fins religiosos, desde que lhes tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9 e 10, não estão sujeitas a qualquer imposto sobre:

a) le offerte dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;

b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;

c) il ricavato delle collette pubbliche a fini religiosi;

d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose e la loro affissione nei luoghi di culto.

2. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti da qualunque imposta o tributo generale, regionale o locale, su:

a) i luoghi di culto e altri beni immobili oppure parti di essi direttamente adibiti alla realizzazione di fini religiosi;

b) le installazioni al servizio diretto ed esclusivo delle attività con fini religiosi;

c) i seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o annessi ai beni immobili, descritti nei precedenti punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale;

e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano destinati a fini di lucro;

a) As prestações dos crentes para o exercício do culto e ritos;

b) Os donativos para a realização dos seus fins religiosos;

c) O resultado das colectas públicas com fins religiosos;

d) A distribuição gratuita de publicações com declarações, avisos ou instruções religiosas e sua afixação nos lugares de culto.

2. A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dioceses e demais jurisdições eclesíásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas pelas competentes autoridades eclesíásticas para a prossecução de fins religiosos, às quais tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9 e 10, estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral, regional ou local, sobre:

a) Os lugares de culto ou outros prédios ou parte deles directamente destinados à realização de fins religiosos;

b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos;

c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação eclesíástica ou ao ensino da religião católica;

d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a) a c) a uso de instituições particulares de solidariedade social;

e) Os jardins e logradouros dos prédios descritos nas alíneas a) a d) desde que não estejam destinados a fins lucrativos;

f) i beni mobili di carattere religioso integrati negli immobili, di cui ai punti precedenti, o loro accessori.

3. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti dalla marca da bollo e da tutte le imposte relative alla trasmissione di beni che incidano su:

a) acquisti onerosi di beni immobili con finalità religiose;

b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni con finalità religiose;

c) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell'apposito registro dello Stato nei termini dell'articolo 10.

4. L'autorità ecclesiastica responsabile per i fondi, destinati alla Chiesa Cattolica ai sensi dell'articolo seguente, è esente da qualunque imposta su detta fonte di reddito.

5. Le persone giuridiche canoniche citate nei numeri precedenti, quando svolgono anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati tali dal diritto portoghese, ossia, fra gli altri, quelli della solidarietà sociale, dell'educazione e della cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggette all'ordinamento fiscale che si applica alla rispettiva attività.

6. La Repubblica Portoghese assicura che i donativi fatti alle persone giuridiche canoniche, di cui ai precedenti numeri e

f) Os bens móveis de carácter religioso, integrados nos imóveis referidos nas alíneas anteriores ou que deles sejam acessórios.

3. A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dioceses e demais jurisdições eclesíásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas pelas competentes autoridades eclesíásticas para a prossecução de fins religiosos, desde que lhes tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9 e 10, estão isentas do imposto de selo e de todos os impostos sobre a transmissão de bens que incidam sobre:

a) Aquisições onerosas de bens imóveis para fins religiosos;

b) Quaisquer aquisições a título gratuito de bens para fins religiosos;

c) Actos de instituição de fundações, uma vez inscritas no competente registro do Estado nos termos do artigo 10.

4. A autoridade eclesíástica responsável pelas verbas que forem destinadas à Igreja Católica, nos termos do artigo seguinte, está isenta de qualquer imposto sobre essa fonte de rendimento.

5. As pessoas jurídicas canónicas, referidas nos números anteriores, quando também desenvolvam actividades com fins diversos dos religiosos, assim considerados pelo direito português, como, entre outros, os de solidariedade social, de educação e cultura, além dos comerciais e lucrativos, ficam sujeitas ao regime fiscal aplicável à respectiva actividade.

6. A República Portuguesa assegura que os donativos feitos às pessoas jurídicas canónicas, referidas nos números an-

alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi del presente Concordato, producono l'effetto tributario di deduzione nella dichiarazione dei redditi, nei termini e nei limiti del diritto portoghese.

Articolo 27

1. La Conferenza Episcopale Portoghese può esercitare il diritto di includere la Chiesa Cattolica nel sistema per la riscossione delle entrate fiscali, previsto nel diritto portoghese.

2. L'inclusione della Chiesa Cattolica nel sistema di cui al numero precedente può essere oggetto di intesa fra gli organi competenti della Repubblica e le autorità ecclesiastiche competenti.

Articolo 28

Il contenuto del presente Concordato può essere sviluppato tramite intese stipulate fra le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica Portoghese.

Articolo 29

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese convengono di creare, nell'ambito del presente Concordato e come sviluppo del principio della cooperazione, una Commissione paritetica.

2. Compiti della Commissione paritetica prevista al numero precedente sono:

a) cercare, in caso di dubbi sull'interpretazione del testo del Concordato, una soluzione di comune accordo;

teriores, às quais tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos desta Concordata, produzem o efeito tributário de dedução à colecta, nos termos e limites do direito português.

Artigo 27

1. A Conferência Episcopal Portuguesa pode exercer o direito de incluir a Igreja Católica no sistema de percepção de receitas fiscais previsto no direito português.

2. A inclusão da Igreja Católica no sistema referido no número anterior pode ser objecto de acordo entre os competentes órgãos da República e as autoridades eclesíásticas competentes.

Artigo 28

O conteúdo da presente Concordata pode ser desenvolvido por acordos celebrados entre as autoridades competentes da Igreja Católica e da República Portuguesa.

Artigo 29

1. A Santa Sé e a República Portuguesa concordam em instituir, no âmbito da presente Concordata e em desenvolvimento do princípio da cooperação, uma Comissão paritária.

2. São atribuições da Comissão paritária prevista no número anterior:

a) Procurar, em caso de dúvidas na interpretação do texto da Concordata, uma solução de comum acordo;

b) suggerire qualsiasi altra misura per la sua buona esecuzione.

Articolo 30

Finché non sia stipulato l'accordo previsto all'articolo 3, la Repubblica Portoghese riconosce i seguenti giorni festivi: Capodanno e Maria Santissima Madre di Dio (1° gennaio), *Corpus Domini*, Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre).

Articolo 31

Sono fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in base al Concordato del 7 maggio 1940 e all'Accordo Missionario.

Articolo 32

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese procederanno all'elaborazione, revisione e pubblicazione della legislazione complementare eventualmente necessaria.

2. In vista di quanto disposto al numero precedente, la Santa Sede e la Repubblica Portoghese effettueranno consultazioni reciproche.

Articolo 33

Il presente Concordato entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, sostituendo il Concordato del 7 maggio 1940.

b) Sugerir quaisquer outras medidas tendentes à sua boa execução.

Artigo 30

Enquanto não for celebrado o acordo previsto no artigo 3, são as seguintes as festividades católicas que a República Portuguesa reconhece como dias festivos: Ano Novo e Nossa Senhora, Mãe de Deus (1 de Janeiro), Corpo de Deus, Assunção (15 de Agosto), Todos os Santos (1 de Novembro), Imaculada Conceição (8 de Dezembro) e Natal (25 de Dezembro).

Artigo 31

Ficam ressalvadas as situações jurídicas existentes e constituídas ao abrigo da Concordata de 7 de Maio de 1940 e do Acordo Missionário.

Artigo 32

1. A Santa Sé e a República Portuguesa procederão à elaboração, revisão e publicação da legislação complementar eventualmente necessária.

2. Para os efeitos do disposto no número anterior, a República Portuguesa e a Santa Sé efectuarão consultas recíprocas.

Artigo 33

A presente Concordata entrará em vigor com a troca dos instrumentos de ratificação, substituindo a Concordata de 7 de Maio de 1940.

Firmato in tre esemplari autentici in lingua italiana ed in lingua portoghese, facenti tutti fede, il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2004.

Assinada em três exemplares autênticos em língua portuguesa e em língua italiana, fazendo todos fé, aos 18 dias do mês de Maio do ano de 2004.

Per la Santa Sede

Angelo Cardinale Sodano
Segretario di Stato

Per la Repubblica Portoghese

José Manuel Durão Barroso
Primo Ministro di Portogallo